

# «Nueve ancianos» Anulan la Legislación del New Deal: El Tribunal Supremo Estadounidense y la Ley Agraria<sup>1</sup>

Antonia SAGREDO SANTOS

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)  
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas  
asagredo@flog.uned.es

Recibido: 4 mayo de 2005

Aceptado: 12 julio de 2005

## RESUMEN

Cuando llega Franklin D. Roosevelt a la presidencia de Estados Unidos, el único poder del gobierno en el que existe una mayoría republicana es el judicial. Como consecuencia, las medidas legislativas del *New Deal* van a encontrar una fuerte oposición dentro de los órganos judiciales, donde un gran número de jueces federales de distrito instruyen sumarios presentados por los representantes de distintas empresas. En ellos se cuestiona la validez de varias leyes propuestas por el ejecutivo y aprobadas por el legislativo, entre ellas las agrarias. Algunas de estas demandas van a llegar hasta el Tribunal Supremo, en el que también predominan los jueces conservadores sobre los liberales, lo que hace que se produzca un rechazo dentro del mismo hacia las iniciativas reformistas promovidas por Roosevelt. Una de las leyes que anula el Tribunal Supremo es la *Agricultural Adjustment Act*, en la que se basa la reforma agraria del *New Deal*.

**Palabras clave:** Estados Unidos, New Deal, Tribunal Supremo, Franklin D. Roosevelt, legislación agraria.

## «Nine Old Men» Invalidate New Deal Legislation: The U. S. Supreme Court and the Agricultural Adjustment Act.

## ABSTRACT

When Franklin D. Roosevelt became the president of the United States, the Judicial power was the only one in the Government with a republican majority. Consequently, the New Deal legislative measures

---

<sup>1</sup> El historiador William H. Peterson, en su obra *The Great Farm Problem*, destacaba el hecho de que el Tribunal Supremo estadounidense estuviera compuesto por «nueve ancianos»: «In 1936, the U. S. Supreme Court held the A.A.A. unconstitutional in the Hoosac Mills case (U.S. v. Butler). As in the Schechter Poultry case voiding the N.R.A., the Court maintained that the federal legislative power had been unconstitutionally delegated and the States' rights violated... two critical Supreme Court decisions which imperiled the entire New Deal idea. The new concept of federal power was threatened by «nine old men». PETERSON, 1959, p. 103.

found a great deal of opposition within the Judicial branch, where there was a large number of federal district judges who admitted summary proceedings presented by the representatives of different enterprises. The validity of several laws proposed by the Executive and approved by the Legislative, among them the agrarian laws, are questioned in these proceedings. Some of these claims reached the Supreme Court, where conservative judges dominated over the liberals. This fact led to the rejection in this tribunal of the reform proposals promoted by President Roosevelt. One of the laws that the Supreme Court invalidated was the Agricultural Adjustment Act on which the New Deal agrarian reform was based.

**Key words:** United States, New Deal, The Supreme Court, Franklin D. Roosevelt, Agrarian Legislation.

**SUMARIO:** 1. Introducción. 2. La oposición del Tribunal Supremo al New Deal. 3. Anulación de la Agricultural Adjustment Act. 4. La Sentencia Butler. 5. Reacciones ante el fallo del Tribunal Supremo. 6. Principal consecuencia de la sentencia: el incremento del apoyo popular a Roosevelt provoca un giro a su política. 7. Conclusiones. 8. Referencias bibliográficas.

## 1. INTRODUCCIÓN

El Tribunal Supremo estadounidense era la máxima instancia dentro del poder judicial y estaba compuesto por nueve miembros, todos hombres mayores, siendo la media de su edad, en 1936, de setenta y dos años. Debido a la mayor presencia en el gobierno del Partido Republicano durante el primer tercio del siglo XX, se nombraron más jueces conservadores. Boake Carter dice que constituyen «una oligarquía de nueve hombres tan repugnante como una dictadura de uno sólo»<sup>2</sup>. No obstante, algunos autores consideran que Herbert C. Hoover dejó a Roosevelt uno de los tribunales más liberales de todo ese período, ya que él designó a tres jueces de ideología liberal y moderada, con lo que el número de conservadores se redujo a cuatro.

En 1933, el Tribunal Supremo estaba compuesto por cuatro miembros conservadores, dos moderados y tres liberales. A la derecha se encontraban: Willis Van Devanter, un republicano de la vieja guardia que ayudó a William McKinley a vencer en las elecciones presidenciales de 1896; James C. McReynolds, secretario de Justicia con el presidente demócrata Woodrow Wilson, y en ese momento el más conservador de todo el tribunal; George Sutherland, un hombre del presidente William H. Taft y presidente del Colegio de Abogados en 1918, quien fue recompensado con un puesto en el Tribunal Supremo después de haber fracasado en su intento de ser elegido miembro del Senado; y, finalmente, Pierce Butler, un católico irlandés demócrata conservador que fue designado por Warren G. Harding ante las airadas protestas del senador George W. Norris. Estos cuatro miembros del Tribunal tenían en común su defensa del *laissez-faire*, del individualismo y de la libre competencia, oponiéndose a cualquier expansión del poder federal. Estos jueces eran conocidos como *The Four Horsemen of Reaction*.

---

<sup>2</sup> CARTER, 1936, p. 87; RAUCH, 1944, pp. 91-92. Rauch manifiesta que los «jueces del Tribunal Supremo desde la Guerra Civil han sido en su conjunto conservadores en un doble sentido: por su insistencia sobre la restricción de los poderes del gobierno a la letra de la Constitución, interpretada de forma estricta, y por su escasa simpatía hacia las reformas liberales y progresistas». (Todas las traducciones del artículo son de la autora).

A la izquierda se situaba un trío, dispuesto a apoyar las iniciativas del gobierno para combatir la depresión económica. El más representativo era Louis D. Brandeis, conocido como el *People's Advocate*. Fue nombrado por el presidente demócrata Woodrow Wilson ante la oposición del republicano William H. Taft y algunos ex-presidentes del Colegio de Abogados de Norteamérica. Otro era Harlan F. Stone, secretario de Justicia con Calvin Coolidge, quien le nombra miembro del tribunal. El tercero era Benjamin N. Cardozo, juez del estado de Nueva York, a quien eligió Herbert C. Hoover para formar parte de la Corte Suprema, ante la insistencia de los senadores George W. Norris y William E. Borah.

En el centro se encontraban dos hombres cuyas posiciones ideológicas no estaban claramente definidas, y eran conocidos como los *swing men*: Owen J. Roberts, el más joven del tribunal, profesor de derecho y que había trabajado como abogado de grandes compañías, a quien el presidente Hoover eligió para formar parte de este órgano judicial en 1930, y Charles E. Hughes que fue nombrado por William H. Taft, aunque renunció a su cargo para presentarse como candidato en las elecciones de 1916 contra Woodrow Wilson; a continuación desempeñó el cargo de secretario de Estado con los presidentes Harding y Coolidge, y en 1930 fue elegido por Hoover para presidir el máximo órgano judicial<sup>3</sup>.

La actividad del Tribunal Supremo se intensificó tanto en los años 20, que el senador George W. Norris manifestó que la Corte se convierte en «una continua asamblea constitucional». Sin embargo, el presidente del tribunal, Charles E. Hughes, justificaba esa actividad afirmando que «la Constitución es lo que los jueces dicen que es»<sup>4</sup>. En esos años el máximo órgano judicial rechazó la política del gobierno que trataba de regular las actividades económicas de las empresas, y para detenerla desarrolló una doctrina constitucional que limitaba el poder del ejecutivo, usándola, con gran frecuencia, para atacar la legislación que aprobó el Congreso. Entre 1920 y 1933 la Corte invalidó varios artículos de leyes aprobadas por el legislativo en veintidós ocasiones.

## 2. LA OPOSICIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO AL NEW DEAL

Los responsables de elaborar la legislación del *New Deal* incluyeron en las primeras medidas cláusulas en las que se hacía referencia a la crisis que vivía el país y a la necesidad de promover nuevas iniciativas para resolver la situación, con el fin de disuadir al Tribunal Supremo de declarar inconstitucionales dichas leyes. El propio presidente Roosevelt muestra sus temores ante las sentencias contrarias a su política reformista como se recoge en las siguientes líneas.

Cuando tomé posesión de mi cargo, el 4 de marzo de 1933, me sentía seguro de que los dos poderes del Gobierno que son electivos, el ejecutivo y el legislativo, esta-

---

<sup>3</sup> BAUM, 1985, realiza un análisis completo sobre the Supreme Court.

<sup>4</sup> Estas manifestaciones son recogidas por McELVAINE, 1993, pp. 283-284.

ban unidos en su determinación de enfrentarse, de una forma valiente, a través de la acción y la experimentación a la nueva crisis que se había desarrollado en nuestra vida nacional. Yo, por supuesto, no conocía cuál sería la actitud del tercer poder, el judicial. Sus miembros eran designados y no elegidos. Una mayoría del Tribunal Supremo, previamente había mostrado una actitud hacia los temas sociales y económicos que era contraria a la filosofía del *New Deal*...<sup>5</sup>.

Por su parte, el gobierno federal esperaba que la Corte Suprema adoptase una postura más comprensiva y tolerante, como lo hizo en la sentencia *New State Ice Co. v. Leibmann*, 285 U. S. 306, 1932, en la que el juez Louis D. Brandeis declaraba que se estaba viviendo «una situación más grave que la guerra»<sup>6</sup>.

Las primeras decisiones que tomó el Tribunal Supremo durante este período son favorables al *New Deal*, apoyadas por los jueces liberales, Roberts y Hughes. Así, en el mes de enero de 1934, la Corte Suprema, en una decisión 5-4, en la sentencia *Home Building & Loan Association v. Blaisdell et al.*, 290 U. S. 426, 1934, redactada por el presidente del tribunal Charles E. Hughes, apoyó la Moratoria de las Hipotecas en Minnesota<sup>7</sup>. A continuación, en el mes de marzo de 1934, con una decisión de 5-4, en la sentencia *Nebbia v. New York*, 291 U. S. 523, 1934, presentada por el juez Owen J. Roberts, se mostró el tribunal a favor de la ley promulgada por el estado de Nueva York en la que se establecía el precio máximo y mínimo de la venta de leche al por menor, y en la que declaró que ni los derechos de propiedad ni los derechos del contrato eran absolutos.

Ante estas dos decisiones favorables a la política del *New Deal*, el juez ultra-conservador James C. McReynolds se lamentaba de que era «el fin de la Constitución como Vds. y yo la entendemos». Este miembro del tribunal estaba en contra de las sentencias, ya que él se oponía sistemáticamente a todas las iniciativas promovidas por el presidente Franklin D. Roosevelt<sup>8</sup>.

Sin embargo, en 1935, finalizó el período de entendimiento entre el Tribunal Supremo y el *New Deal*. El máximo órgano del poder judicial cambió su tendencia y empezó a oponerse a las medidas reformistas del Ejecutivo. Por márgenes ajustados (5-4), el tribunal se mostraba contrario a la administración demócrata, debido a que los jueces Roberts y Hughes pasaron a alinearse con los conservadores, iniciándose una serie de sentencias en las que iban a considerar anticonstitucionales varias leyes aprobadas por el gobierno federal<sup>9</sup>.

La primera de las decisiones contrarias al *New Deal* se produjo en el mes de enero y fue conocida como el Caso del Petróleo, en la sentencia *Panama Refining Co. v. Ryan* 293 U. S. 388, 1935. En ella se anuló el artículo 9 (c) de la *National Industry Recovery Act*, *NIRA*, en una decisión de 8-1. La *NIRA* era una ley muy

<sup>5</sup> Franklin D. Roosevelt. «The Fight Goes On». *Collier's* September, 13, 1941, p. 13.

<sup>6</sup> Citado en LEUCHTENBURG, 1963, p. 143.

<sup>7</sup> Para un análisis más pormenorizado de este tema, véase el artículo de Jane Perry Clark. «Emergencies and the Law». *Political Science Quarterly*, XLIX, 1936, pp. 268-283.

<sup>8</sup> Véase LEUCHTENBURG, 1963, p. 144.

<sup>9</sup> Para analizar en detalle la respuesta del Tribunal Supremo a las medidas del *New Deal* durante el período 1934-1936, consúltese MAIDMENT, 1991, *passim*.

controvertida, y habían surgido críticas hacia la misma incluso entre los propios asesores del presidente Roosevelt. Rexford G. Tuxwell, subsecretario de Agricultura, la censuraba por «no ir muy lejos», mientras que Louis D. Brandeis, miembro del Tribunal Supremo de talante liberal, y Felix Frankfurter, profesor de derecho de la universidad de Harvard, quien influye notablemente en el *New Deal* al ser el encargado de seleccionar el personal para los distintos organismos e instituciones, creen que «iba demasiado lejos»<sup>10</sup>. También surgieron ataques desde el partido republicano, sobre todo por parte del expresidente Herbert C. Hoover, quien aseguraba que la *NIRA* era el proyecto de monopolio más gigantesco que jamás se había dado en la historia de Estados Unidos y denunciaba que contenía prácticas fascistas<sup>11</sup>.

A continuación, el Tribunal Supremo invalidó la ley de jubilación de los ferroviarios, con la sentencia *R. R. Retirement Board v. Alton* R. R. 295 U. S. 330, 1935, por una decisión de 5-4. En este caso el juez Roberts se alineó con los conservadores. A partir de esta sentencia, se consideraba a Roberts como enemigo del *New Deal* y se temía que el futuro de toda su legislación iba a depender de la voluntad de este juez, y que estaba en peligro de ser totalmente perdido. De hecho así ocurrió, ya que el 27 de mayo de 1935 se declaraba inconstitucional, por unanimidad de todo el Tribunal, una medida legislativa en la que se basaba toda la recuperación industrial, la *National Industry Recovery Act, NIRA*, en la sentencia *A. L. A. Schechter Poultry Co. et al. v. United States*, 295 U. S., 553, 1935.

Igualmente, la legislación agraria del *New Deal* recibió su primer ataque el día 27 de mayo de 1935, conocido como *Black Monday*, con la sentencia *Joint Stock Land Bank v. Radford*, dictada en Louisville, Kentucky, por la que se declaró inconstitucional la *Frazier-Lemke Farm Mortgage Act of 1934*. La decisión también se adoptó por unanimidad.

Esta sentencia iba a resolver la demanda presentada ante los tribunales por el Louisville Joint Stock Land Bank contra un agricultor de Kentucky, William Radford, quien había suscrito una hipoteca sobre su propiedad por valor de 5.000 dólares. Radford dejó de pagar la hipoteca y se acogió a las condiciones ventajosas que le ofrecía la ley *Frazier-Lemke*, que le aseguraba una nueva valoración de su explotación y fijaba el valor de la misma en la mitad del de la hipoteca. El banco rechazó ese precio, y el agricultor, según las provisiones de la ley, obtuvo un aplazamiento del proceso durante cinco años, en los cuales continuaba trabajando la finca y pagaba al banco un precio de arrendamiento, fijado por el juez, de 325 dólares.

La sentencia del Tribunal Supremo declaraba que la ley que concedía la moratoria era anticonstitucional. Para emitir su veredicto se apoyó en la Enmienda V de la Constitución que prohibía al Estado apoderarse de los bienes de cualquier particular sin pagar una compensación adecuada<sup>12</sup>, a pesar de que en 1934, el Tribunal

---

<sup>10</sup> Estas opiniones son recogidas por DAWSON, 1980, p. 42.

<sup>11</sup> HOOVER, 1953, p. 334. También en la prensa española se recoge esta oposición, véase como ejemplo: «En América. El expresidente Hoover ataca de nuevo a la NIRA», *La Voz*, Madrid, 25 de junio de 1935, p. 5.

<sup>12</sup> Texto original: «No person shall... be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation». *The Constitution of the United States. Amendment V. Trial and Punishment, Compensation for Takings*. Ratified 12/15/1791.

Supremo había apoyado la ley que concedía una moratoria a las hipotecas agrarias en el estado de Minnesota. Esta decisión, en opinión de los partidarios de la ley, no tenía en cuenta la situación de crisis que se vivía en el país y que podía justificar la puesta en práctica de esta medida con carácter transitorio.

### 3. ANULACIÓN DE LA AGRICULTURAL ADJUSTMENT ACT

La *Agricultural Adjustment Act* se aprobó el 12 de mayo de 1933<sup>13</sup>. Esta ley agraria marcaba el comienzo del *New Deal* para el agro norteamericano, y a diferencia de las medidas impulsadas por los anteriores gobiernos, Franklin D. Roosevelt promovió una intervención directa del Estado en la agricultura. Algunos historiadores consideraban excesivas las funciones que asumió el gobierno federal<sup>14</sup>. En esta ley se recogían las principales propuestas de los dos planes agrarios que se habían estado debatiendo en la década de los 20 en los Estados Unidos: el *McNary-Haugen Plan* y el *Domestic Allotment Plan*. Del primero, se introdujo la idea de vender los excedentes del campo al extranjero y la negociación de acuerdos comerciales. Del segundo, se incorporó el control de la producción; la cooperación voluntaria de los agricultores, estimulada por unas rentas o pagos; la colaboración de los agricultores en la nueva administración y el *processing tax*.

El presidente consideraba a la agricultura una pieza clave en su programa de recuperación, pero admite que la ley agrícola era un «experimento». Raymond Moley, asesor del presidente, hacía hincapié en que esta ley dejaba una gran capacidad de maniobra a la administración para realizar posteriores concreciones, siendo considerada como una ley «ómnibus». Edward O'Neal presidente del *Farm Bureau* decía que esta iniciativa era «la Carta Magna de la agricultura americana». Por su parte, el historiador James E. Sargent aseguraba que esta pieza legislativa era la primera en la escala de prioridades políticas y económicas de Roosevelt, seguida, aunque no al mismo nivel, por la *Economy Act*, y la *National Industrial Recovery Act*, formando su «triple programa de prioridades»<sup>15</sup>.

Evidentemente, la *Agricultural Adjustment Act* también tenía sus detractores. Entre ellos se encontraban los conservadores, que no admitían que el gobierno federal planificase la agricultura. Fred Britten, representante del estado de Illinois, aseguraba que era «la ley más bolchevique que cualquiera de las leyes que existían en la Unión Soviética», mientras que Joseph W. Martin, de Massachusetts, mantenía «que iban hacia Moscú», siendo una clara referencia a la política de Roosevelt, a la que se tachaba de «izquierdista»<sup>16</sup>. Sin embargo, Herbert C. Hoover, el presidente

<sup>13</sup> La *Agricultural Adjustment Act*, (Public n.º 10, H. R. 3835, 73<sup>rd</sup> Congress, 1<sup>st</sup> Session). En THE SECRETARY OF STATE, (dir.), 1934, pp. 31-54.

<sup>14</sup> Uno de los defensores de esta argumentación es HAMILTON, 1991, p. 237.

<sup>15</sup> Franklin D. ROOSEVELT. «The New Deal and the Press». *Liberty* 15, (March 26, 1938), p. 10. Las opiniones de O'Neal son citadas por KILE, 1948, p. 211. TUXWELL, 1957, pp. 275-277; MOLEY, 1966, p. 257; SARGENT, 1981, p. 266.

<sup>16</sup> Estos comentarios son recogidos en SCHLESINGER, Jr., 1988, p. 40.

republicano, afirmaba que era «un proyecto fascista». Por su parte, Louis D. Brandeis, miembro del Tribunal Supremo, consideraba que la ley agraria no era democrática porque el programa era impuesto desde arriba<sup>17</sup>.

Uno de los elementos más polémicos que introdujo en la agricultura norteamericana la aprobación de la *Agricultural Adjustment Act* era el *processing tax*<sup>18</sup>. Esta tasa debía ser abonada por los que efectuaban el primer proceso de transformación de los productos básicos contemplados en la ley y serviría para subvencionar a los agricultores que colaborasen con el plan de control de la producción<sup>19</sup>.

Desde la aprobación de la ley agraria, se registró un fuerte rechazo hacia dicho impuesto por parte de los que realizaban el proceso de transformación y distribución de los productos agrarios, llegando incluso a cuestionar la constitucionalidad del mismo e incluso de la propia ley. Al mismo tiempo buscaban la adhesión de los obreros de la industria y de los consumidores de las ciudades, argumentando que el pago del mismo aumentaba el desempleo en la industria transformadora e incrementaba el coste de la vida, ya que, finalmente, repercutiría sobre los consumidores el pago de este gravamen<sup>20</sup>. Los motivos de este rechazo eran expresados por el representante británico en Estados Unidos, Sir Ronald Lindsay, cuando envió al *Foreign Office* sus impresiones sobre la ley, destacando que su texto era complejo y que el *processing tax* repercutiría en las transacciones comerciales futuras<sup>21</sup>.

En varias ocasiones, los que efectuaban el proceso de transformación y distribución de los productos agrícolas acudían a los tribunales para que dictaminaran sobre la legalidad de dicho impuesto, argumentando que perjudicaba la buena marcha de sus negocios e incluso podía llevarlos a la ruina. En 1933, ya se iniciaron recursos contra los reglamentos que establecía la ley agraria, como el presentado por los vendedores de leche al por menor del distrito de Columbia, pero que fue desestimado por el juez.

No obstante, el caso más representativo es el protagonizado por una compañía textil de New England, Massachusetts, la «Hoosac Mills Corporation», que se negaba a pagar el impuesto de transformación que fijaba la ley agraria desde el 8 de octubre de 1933, y que buscando el apoyo de los jueces acudió a los tribunales. Este caso tuvo una especial incidencia en la agricultura norteamericana, ya que en la sentencia

---

<sup>17</sup> Citados en PETERSON, 1959, p. 99 y DAWSON, 1980, p. 73.

<sup>18</sup> Para subvencionar un producto agrario, se establece el *processing tax* sobre ese producto desde el inicio del año comercial. El secretario de Agricultura fija el valor de ese impuesto, y lo puede ajustar posteriormente para aproximar el precio medio de ese producto y el precio justo del mismo. Se considera precio justo al precio que otorgue al agricultor un poder adquisitivo semejante al que existió en el período base, 1909-1914.

<sup>19</sup> Los productos agrarios considerados como básicos y sobre los cuales se establece un control en su producción son: algodón, trigo, maíz, ganado porcino, tabaco, arroz, leche y sus derivados. La ley *Jones-Connally*, del 7 de abril de 1934, amplía la lista de los productos agrarios controlados por el gobierno federal con: ganado, cacahuetes, centeno, lino, cebada y sorgo. Posteriormente, la ley *Jones-Costigan*, de 9 de mayo de 1934 incorpora la remolacha azucarera y la caña de azúcar, y finalmente, una enmienda a la ley del 24 de agosto de 1935, añade la patata.

<sup>20</sup> KIRKENDALL, 1975, p. 91.

<sup>21</sup> Carta de Sir Ronald Lindsay a Sir John Simon, Washington, May 18, 1933. En: BOURNE & WAITT, (general eds.), Part II, Series C, Vol. 4, March 1933-September 1934, 1986, p. 36.

que dictaminó el Tribunal Supremo sobre él, se declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley agraria de 1933, sobre la que se estructuraba la reforma agraria del *New Deal*.

En un primer momento, el caso se llevó a los tribunales del estado de Massachusetts, los cuales dictaminaron, el 23 de enero de 1934 la constitucionalidad de la *Agricultural Adjustment Act*, así como la legalidad del impuesto de transformación. Sin embargo, surgieron protestas entre las empresas que pagaban este impuesto, al comprobar que seguía sin abonarlo la firma que estaba litigando, registrándose una gran hostilidad en toda la industria textil hacia la ley agraria. Como consecuencia del veredicto, la compañía demandante presentó varias objeciones a la constitucionalidad de la ley, esperando que alguna de ellas fuera considerada válida por el tribunal. Sin embargo, el juez federal de distrito de Boston, Elisha Brewster, a pesar de su ideología republicana, apoyó la posición del gobierno en una sentencia dictada en el mes de octubre de 1934.

En 1935, se produjo un hecho que cambia el sentido del contencioso entre la administración y el poder judicial con respecto a la ley agraria. El 27 de mayo se emitió la sentencia Schechter por la que se invalidaba la *National Industrial Recovery Act*, *NIRA*, la ley industrial por excelencia del *New Deal*. A partir de ese momento se cuestionó con gran insistencia la constitucionalidad de todos los programas promovidos por la *Agricultural Adjustment Act*. Sin embargo, en Estados Unidos esta ley todavía estaba vigente y para evitar que se declarase inconstitucional por el poder judicial, la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, introdujo algunas enmiendas ese mismo año. En cambio, la política agraria del *New Deal* estaba seriamente amenazada y con pocas posibilidades de continuar.

A pesar de los intentos para salvar a la ley agraria de la acción del poder judicial, en julio de 1935 el Tribunal de Apelación revocaba las decisiones de enero y octubre de 1934 por las que se reconocía la validez del impuesto de transformación y declaraba que dicho impuesto era inconstitucional, alegando que este gravamen había sido impuesto por una delegación anticonstitucional del poder legislativo y que la regulación de la producción agraria no estaba incluida en la Cláusula del Comercio y entraba en conflicto con la Enmienda X de la Constitución que preservaba los derechos de los distintos estados<sup>22</sup>.

Como consecuencia del fallo del Tribunal de Apelación contrario al gobierno, un gran número de industrias que tenían que pagar el impuesto de transformación se negaban a abonarlo, con la convicción de que, finalmente, se declararía inconstitucional la ley agraria, como había ocurrido con la ley industrial. Paralelamente, se iniciaron 1.100 procesos judiciales en los que se demandaba la anulación de la ley, dejando de recaudar la Administración 100 millones de dólares por el impago de este impuesto<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Texto original: «The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people». *The Constitution of the United States. Amendment X.- Powers of the States and People*.

<sup>23</sup> SALOUTOS, 1982, p. 131.

Desde el momento en que se produjo la sentencia del Tribunal de Apelación invalidando la ley agraria, los abogados del *New Deal* comenzaron a preparar la defensa de la medida agraria y especialmente la del impuesto de transformación ante el Tribunal Supremo. El subsecretario de Justicia, Stanley Reed, al encargarse del caso, buscó el asesoramiento de Alger Hiss, quien conocía perfectamente la ley agraria. Además de Hiss trabajaban en la defensa del caso, Charles Horsky, W. Marvin Smith y Paul Freund. Hiss decidió usar la misma táctica que el juez Brandeis, tratando de demostrar que las medidas del gobierno demócrata habían mejorado las condiciones de la agricultura estadounidense. Para ello, Mordecai Ezekiel, Louis Bean y otros economistas prepararon un informe exhaustivo sobre los planes agrarios del presidente Roosevelt y los orígenes de la ley agraria.

Sin embargo, mientras la demanda de inconstitucionalidad de la ley agraria, emprendida por la «Hoosac Mills Corporation», seguía su curso, el secretario de Agricultura, Henry A. Wallace, adoptó una estrategia uniforme para todos los procesos judiciales emprendidos contra la administración, al dejar que llegasen al Tribunal Supremo, para evitar que se alargasen excesivamente los pleitos al recurrir en los Tribunales de Apelación.

Por su parte, la compañía demandante confió su defensa al abogado George W. Pepper, ex-senador y amigo personal del juez Owen J. Roberts. Toda su argumentación era un ataque abierto a la constitucionalidad de la ley agraria y finalizaba su exposición rebatiendo la reglamentación por parte del Estado<sup>24</sup>.

Finalmente, el caso Butler llegó al Tribunal Supremo como una reclamación del gobierno contra los acreedores que se hacían cargo de la industria de algodón de Massachusetts «Hoosac Mills Corporation», que estaba en quiebra desde el inicio del pleito contra el impuesto. Se les reclamaba el pago de 81.694'28 dólares en concepto de impuestos, incluido el de transformación<sup>25</sup>. Así, el 6 de enero de 1936 el máximo órgano judicial dictó la sentencia *United States v. Butler et al., Receivers of Hoosac Mills Corporation*, 297 U. S. 1, conocida como «Hoosac Mills». En este caso el voto de los jueces no fue unánime. Estaban a favor de anular la ley los cuatro miembros conservadores, Owen J. Roberts y el presidente del tribunal Charles E. Hughes, y en contra los tres jueces liberales: Louis D. Brandeis, Harlan F. Stone y Benjamin N. Cardozo, produciéndose una decisión de 6-3 contraria a la administración de Roosevelt<sup>26</sup>.

La postura del presidente del tribunal ha sido muy debatida. El secretario de Justicia, Homer Cummings, consideraba que el juez Hughes «se inclina hacia uno de los dos lados para evitar que sea una sentencia de 5-4, ya que la gente está cansada

---

<sup>24</sup> Texto original: «I pray almighty God that not in my time may the land of the regimented be accepted as a worthy substitute for the land of the free». Citado en MORGAN, 1985, p. 431.

<sup>25</sup> IRONS, 1982, p. 181.

<sup>26</sup> Un corresponsal de prensa español resume muy gráficamente el proceso: «el caso fue pasando como balón que bota de jurisdicción judicial en jurisdicción judicial, hasta que llegó a la Corte Suprema. Allí, los nueve grandes graves señores que la constituyen, votaron 6 a 3 por la anulación de la AAA». En Aurelio Pego. «El mayor enemigo del presidente Roosevelt, es la Constitución.- El Supremo anula la AAA que rehabilitó a los campesinos». *Ahora*. Madrid, 19 de enero de 1936, p. 11.

de este tipo de decisiones tan ajustadas»<sup>27</sup>. Asimismo, el historiador Kenneth S. Davis mantiene que Hughes adoptó esta postura por razones políticas, ya que temía una reacción popular adversa si se producía otra votación 5-4. Al mismo tiempo, decía que esa falta de convicción y entusiasmo por parte de Hughes se apreciaba en que incluso delegó la redacción de la opinión mayoritaria en el juez Owen J. Roberts, quien asumió la labor gustosamente<sup>28</sup>.

#### 4. LA SENTENCIA BUTLER

El Tribunal Supremo presentó el 6 de enero de 1936 la sentencia *United States v. Butler et al., Receivers of Hoosac Mills Corporation*, 297 U. S. 1, conocida como «Hoosac Mills» o la sentencia Butler, en la que se producía una decisión de 6-3 a favor de anular el *processing tax* de la *Agricultural Adjustment Act*. La sentencia recogía la opinión mayoritaria, cuyo portavoz era el juez Owen J. Roberts y la opinión disidente que exponía el miembro del tribunal Harlan F. Stone<sup>29</sup>.

La argumentación presentada en la decisión mayoritaria y por la que se declaraba inconstitucional el impuesto de transformación contemplado en la ley agraria se basaba en varios principios, entre los que cabe destacar los siguientes:

- El impuesto de transformación no era sólo un gravamen, sino que formaba parte de un programa de control de la producción establecido por el gobierno federal en el que la recaudación del mismo se dedicaba a financiar a los productores que se acogían a él. Estaba claro que el Departamento de Agricultura había diseñado el plan como una forma de mantener a raya a una minoría que no colaboraba con él. «Esto era una forma de coacción por presión económica. El poder de elección era ilusorio»<sup>30</sup>.
- El nuevo impuesto de transformación pasó a ser un mal uso del poder de gravar impuestos del Gobierno, ya que se consideraba que «la ley agraria invadía los derechos reservados a los estados. Era un plan para regular y controlar la producción agraria, un asunto que superaba al poder delegado en el gobierno federal. El impuesto, la asignación de los fondos, y la dirección de su desembolso, no eran sino partes del plan. Todos ellos eran medios para un fin inconstitucional»<sup>31</sup>. El historiador liberal, James M. Burns, quien valora positivamente esta medida, mantiene que no es un verdadero impuesto sino que constituye una expropiación de un grupo en beneficio de otro, formando parte de un plan para controlar la producción agraria»<sup>32</sup>.

<sup>27</sup> Citado en MORGAN, 1985, p. 432.

<sup>28</sup> DAVIS, 1986, pp. 607-608. Por su parte, GRAHAM & WANDER, 1985, p. 411, manifiestan que esta hipótesis no explica por qué en cambio el juez Charles E. Hughes permite decisiones 5-4 a favor del *New Deal* en 1937, momento en el que también pueden perjudicar la credibilidad del Tribunal Supremo.

<sup>29</sup> THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, 1936.

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 11.

<sup>31</sup> *Ibidem*, p. 9.

<sup>32</sup> BURNS, 1984, p. 231.

- El Congreso tenía la facultad de gravar impuestos para proporcionar un «estado de bienestar», pero los jueces más conservadores dudaban que una asignación para ayudar a la agricultura pudiera considerarse como una mejora del «estado de bienestar de los Estados Unidos». Sin embargo, los jueces liberales disidentes, Cardozo, Brandeis y Stone consideraban que el poder legislativo tenía autoridad para establecer impuestos que redundasen en beneficio del interés general<sup>33</sup>. Por su parte, la administración aseguraba que era indispensable la aplicación de este impuesto para conseguir ese estado de bienestar de los ciudadanos, como se deduce de las palabras del presidente defendiendo esta postura y que aparecían recogidas en la prensa española coetánea: «Roosevelt mantiene la teoría de que un Estado que no contribuye al bienestar de sus ciudadanos no es un Estado. Es simplemente un gobierno. Es una ficción. Y una ficción bastante aburrida»<sup>34</sup>.
- La ley agraria era un plan para imponer unas regulaciones federales en temas que atañen a los estados. Si se permitía esta tendencia, «los Estados Unidos se convertirían en un gobierno central que ejercería una política incontrolada en todos los estados de la Unión, suplantando todo el control local en la regulación de los temas que competían a los estados». El propio Tribunal Supremo declaró que la ley agraria constituía «una invasión de los derechos de los estados para regular sus actividades locales». Sin embargo, el secretario de Agricultura, Henry A. Wallace, rebatía este punto de la sentencia diciendo que «si la agricultura fuese un asunto local en 1936, como afirmaba el Tribunal Supremo, la mitad de la población moriría de hambre rápidamente... (y recordaba) que la doctrina de los derechos de los estados, invocada ahora por la Corte Suprema, era una barrera al progreso, incluso en 1787, siendo la causa del terrible conflicto de 1861»<sup>35</sup>. Por su parte, el presidente manifestaba que el Tribunal Supremo creó una tierra de nadie, «*no man's land*», donde ni el gobierno federal ni los gobiernos de los distintos estados tenían jurisdicción para actuar<sup>36</sup>. El historiador William H. Peterson temía que el nuevo concepto de poder federal fuera a ser amenazado «por nueve ancianos»<sup>37</sup>.

En la historiografía posterior se considera que la sentencia Butler fue un deliberado intento de destruir el *New Deal*, incluso más que la decisión sobre la *National Industrial Recovery Act*, ya que es obvio que no podría desarrollarse ninguna política agraria si no era a escala nacional. William E. Leuchtenburg la califica de

<sup>33</sup> THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, 1936, pp. 7-9.

<sup>34</sup> En este artículo el corresponsal Aurelio Pego trata de restar importancia al enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial ya que apoya las actuaciones de la Corte Suprema. Al mismo tiempo, descarga la responsabilidad de la decisión en el texto de la Constitución. En «El mayor enemigo del presidente Roosevelt, es la Constitución.- El Supremo anula la AAA que rehabilitó a los campesinos». *Ahora*. Madrid, 19 de enero de 1936, p. 11.

<sup>35</sup> THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, 1936, p. 14; WALLACE, 1936, p. 93; LORD, 1939, p. 169.

<sup>36</sup> Las palabras del presidente Franklin D. Roosevelt son recogidas por MANEY, 1992, p. 89.

<sup>37</sup> PETERSON, 1959, p. 103.

«lamentable», Murray R. Benedict de «contradictoria», y Arthur S. Link y William B. Catton de «muy forzada»<sup>38</sup>.

El problema del justo límite entre las competencias de los distintos estados y los del gobierno federal era uno de los puntos de la sentencia que se recogía con mayor insistencia en la información que se daba sobre la misma.

Uno de los argumentos de la decisión mayoritaria para anular el impuesto de transformación de dicha medida, era que dicha ley de reforma agraria no se atenía a la Constitución. En la sentencia Butler se hacía una interpretación estricta de la Carta. Sin embargo en la decisión de los jueces que disienten se consideraba que no se debía hacer una interpretación restrictiva, ya que era necesario adaptarla a la nueva situación económica que vivía el país, producto del desarrollo industrial que se había ido registrando a través de los años. El portavoz de los disidentes, el juez Harlan F. Stone, aseguraba que el Tribunal Supremo abusaba de su derecho de revisión judicial de las leyes y citaba las palabras del juez Oliver W. Holmes, Jr.: «hay que recordar que los legisladores son los últimos guardianes de las libertades y del bienestar del pueblo en una medida semejante a la de la Corte»<sup>39</sup>.

La socióloga coetánea, Miriam S. Farley, defensora del *New Deal*, mantenía que en este caso «los jueces utilizan su poder para modelar la política nacional de acuerdo con su visión social, económica y personal, usurpando la función que pertenece sólo a los representantes elegidos por el pueblo», porque, como recoge la opinión disidente de la sentencia, «para anular leyes imprudentes de la legislación no hay que apelar a la Corte sino a las votaciones y a los procesos de un gobierno democrático»<sup>40</sup>. No obstante, habría que matizar estos comentarios, ya que no es lo mismo la imprudencia de una ley que su inconstitucionalidad. En este último caso, es una cuestión técnica, además de social, que el Tribunal Supremo puede dirimir pero que está más allá, generalmente, de la capacidad de juzgar de los votantes.

En el párrafo final de la opinión de la minoría del Tribunal Supremo, es donde mejor se reflejaba su idea sobre la interpretación de la Constitución. En él trataban de provocar una toma de conciencia realista del papel del poder judicial para mantener un equilibrio entre los tres poderes del gobierno, responsables todos ellos de crear una estructura federal que permitiera compaginar la tradición y el cambio, y así ir adaptando la Carta Magna a las necesidades del momento:

Los Tribunales no son el único organismo del gobierno que debe asumir la capacidad de gobernar. El Congreso y los órganos judiciales desgraciadamente pueden fallar o equivocarse en el cumplimiento de su deber constitucional. Pero la interpretación de nuestra gran Carta de Gobierno... procede del supuesto de que la responsabilidad de conservar nuestras instituciones concierne exclusivamente a los tres poderes del gobierno... lo que dice sobre el poder de gravar impuestos y gastos, incluye el

<sup>38</sup> BENEDICT, 1953, p. 348; LEUCHTENBURG, 1963, p. 170; LINK & CATTON, 1967, p. 146.

<sup>39</sup> THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, 1936, p. 20.

<sup>40</sup> FARLEY, 1936, p. 32; THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, 1936, p. 15.

poder de corregir los desajustes económicos a nivel nacional a través de donaciones condicionadas de dinero<sup>41</sup>.

La sentencia sobre la ley agraria suscitaba así un debate sobre cómo debía interpretar el Tribunal Supremo la Constitución. Uno de los protagonistas de la política agraria del *New Deal*, Henry A. Wallace, secretario de Agricultura, creía que en la sentencia Butler se interpreta la Constitución

según la visión de la época en que todo se realizaba de forma manual, cuando hacían falta diecinueve agricultores para producir suficientes excedentes para alimentar a un habitante de la ciudad, en vez de interpretarla según la visión de la sociedad industrial moderna...<sup>42</sup>.

Wallace hacía un especial hincapié en que los jueces de la Corte tenían una visión trasnochada y anacrónica de la sociedad.

En la opinión pública norteamericana aparecía una fuerte crítica hacia la interpretación que se hacía de la Constitución en la sentencia del Tribunal Supremo<sup>43</sup>. Asimismo, surgió un juicio interpretativo negativo en la prensa liberal norteamericana que apoyaba la opinión de los jueces disidentes, considerando que ésta «marcaba el camino del progreso de nuestra vida social». Se temía, que al tratar el Tribunal Supremo a la Constitución con una estrechez de miras, llegara un día en que los ciudadanos, quienes son al final los árbitros de la democracia, quisieran hacer enmiendas a la Carta Magna, para permitir que el gobierno federal pudiera resolver los problemas del país<sup>44</sup>. Se entiende que el verdadero temor era a una reacción popular violenta o revolucionaria en la nación americana.

En general, entre los sectores conservadores estadounidenses se liberaba al Tribunal Supremo de toda responsabilidad en la anulación de las medidas legislativas promovidas en el *New Deal*, insinuando que la Constitución era obsoleta y, como consecuencia, incapaz de adaptarse a las necesidades de la sociedad norteamericana. El argumento que se presentaba era que los jueces se habían limitado a cumplir con el deber de interpretar fielmente la Carta Magna, considerando que el principal obstáculo estaba en la Constitución que data de 1787. Esta línea argumental suponía abrir un nuevo motivo de controversia en la sociedad norteamericana, al cuestionar la vigencia de la Constitución y la necesidad de introducir cambios en la misma para que respondiera a las necesidades del momento.

Asimismo, los conservadores norteamericanos insistían en que el máximo órgano del poder judicial debía anular las leyes del *New Deal* porque habían sido elaboradas por los poderes ejecutivo y legislativo excediéndose en sus atribuciones. Igualmente, consideraban que el sistema de «*checks and balances*» que debía regir

<sup>41</sup> *Ibidem*, p. 20.

<sup>42</sup> WALLACE, 1936, pp. 92-93.

<sup>43</sup> Véase a modo de ejemplo la Carta de Kenneth Dann Magruder a Franklin D. Roosevelt, 8-1-1936 y el Telegrama de Henry S. Commager a Franklin D. Roosevelt, 7-1-1936. Office File Miscellaneous, 1936-1945, Supreme Court, Folder 1K, Archives, *Franklin Delano Roosevelt Library*, Hyde Park, New York.

<sup>44</sup> John E. Geary. «Disappointed», *The Post Standard*, Syracuse, New York, 9-1-1936. Asimismo, apoya esta opinión CARTER, 1936, p. 87.

el gobierno americano estaba en peligro debido al excesivo poder que iba adquiriendo el presidente Roosevelt.

## 5. REACCIONES ANTE EL FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO

Sobre la sentencia del Tribunal Supremo, por la cual se anula el impuesto de transformación de la ley de reajuste agrario de 1933, expresaron sus opiniones los sectores más representativos de la sociedad norteamericana, haciendo todo tipo de comentarios.

Una de las reacciones sobre las que se ha hecho más hincapié es la del presidente, responsable de la política agraria del *New Deal*, contra la que va dirigida principalmente la sentencia Butler. Con esta decisión se iba a producir la confrontación entre el poder ejecutivo y el judicial que tanto habían buscado los republicanos. Sin embargo, a pesar de este enfrentamiento abierto, Roosevelt no reaccionó de forma inmediata ni presentó su oposición a la sentencia de una forma clara.

El historiador liberal James M. Burns relata que Roosevelt recibió la noticia de la anulación de la ley agraria cuando estaba con el secretario de Guerra Dern y cómo éste comentó la reacción del presidente: «Puso la hoja de papel delante de él y sonrió». Tras esa sonrisa posiblemente se ocultaba el plan de Roosevelt de que el Tribunal Supremo cayera en su propia trampa<sup>45</sup>. Hay que recordar que la sentencia se producía en un año de elecciones presidenciales en las que Roosevelt iba a ser el candidato demócrata y debía ser cauto para no perder votos.

Dos días después de la decisión del Tribunal Supremo, en la cena de celebración de «Jackson Day», en Washington, el presidente Roosevelt mostraba una actitud reservada, conducta que era apoyada por un sector de la población americana, y que él justificó diciendo:

Sé que no están sorprendidos porque no he hecho comentarios sobre la decisión de hace dos días del Tribunal Supremo. No puedo hacer un juicio de antemano sin estudiarlo con sumo cuidado... Es suficiente decir que conseguir justicia para la agricultura americana es el más inmediato y constante objetivo<sup>46</sup>.

Otra de las reacciones más tratadas es la que se registró entre los artífices de la legislación del *New Deal*. Lógicamente, todos ellos se mostraban en contra de la Corte Suprema. Los *New Dealers* acusaban a los jueces de vivir en el pasado y de tratar de justificar sus tendencias conservadoras con la Constitución. Igualmente, se preguntaban si el pueblo americano iba a continuar confiando en un sistema que permitiera que un órgano que no era electivo continuara obstruyendo la labor emprendida por el poder ejecutivo y legislativo para combatir la crisis. Así, el senador Bankhead, autor de la ley para controlar la producción del algodón, denunciaba

---

<sup>45</sup> BURNS, 1984, pp. 232-233

<sup>46</sup> Testimonio recogido en SALOUTOS, 1982, p. 136.

que la opinión de la mayoría, presentada por el juez Roberts era sobre todo un discurso político que se apoyaba en un dictamen técnico sobre la constitucionalidad de la ley agraria. Por su parte, el gobernador Earle de Pennsylvania declaraba que la Corte se había convertido en «un cuerpo político» con seis miembros que se comprometían con las ideas de la *Liberty League*<sup>47</sup>.

Asimismo, el secretario de Agricultura, Henry A. Wallace, emprendió una ofensiva contra el Tribunal Supremo. También fue criticada la sentencia en los círculos legales y del Congreso estadounidenses coetáneos. Sin embargo, entre los responsables de Justicia se percibía un ambiente de frustración, concretándose en la intención de dimitir del subsecretario de Justicia<sup>48</sup>.

Igualmente, los agricultores, principales destinatarios del programa agrario, reaccionaron violentamente ante la declaración de inconstitucionalidad del impuesto de transformación de la ley agraria, ya que dejaba en suspenso todas las subvenciones a los labradores. Como consecuencia, se produjo una demanda de nueva legislación que les permitiera seguir recibiendo las ayudas del gobierno.

También se aborda la reacción que se registraba en la prensa norteamericana ante la sentencia Butler. En una noticia del periódico *Los Angeles Examiner*, que pertenecía al magnate de la prensa William R. Hearst, se defendía con ahínco el veredicto de la Corte Suprema y se atacaba la política del *New Deal*: «la decisión del Tribunal Supremo sólo ha registrado lo que ya venía prevaleciendo en la opinión popular. Cada abogado justo y cada hombre razonable lo anticipaba»<sup>49</sup>. El diario demócrata independiente, *The New York Times*, publicaba una réplica de un lector a un artículo firmado por la editorial aparecida en el periódico justificando la sentencia Butler<sup>50</sup>. Asimismo, aparecen manifestaciones en este mismo sentido en la prensa conservadora europea<sup>51</sup>.

A continuación se presentan dos artículos contrarios a la sentencia: Jonathan Daniels, editor de la publicación *News and Observer*, escribía que los jueces del tribunal «estaban tratando la ley de la forma más lógica y purista, pero, igualmente, de forma delicada, estaban haciendo caso omiso a los acontecimientos que ocurrían en la sociedad de los Estados Unidos». Por su parte, Virginius Dabney del *Times*

---

<sup>47</sup> La *Liberty League* era una organización creada el 22 de agosto de 1934, en la que se integraron un grupo de conservadores adinerados, cuyo líder era Albert Smith. Su principal objetivo era desacreditar al presidente Roosevelt, atacando sus medidas legislativas para así defender sus intereses. George H. Earle, «Address of January 18, 1936». G. H. Earle Manuscript, Speech and News File 73. *George Earle III Manuscript*, Bryn Mawr, Pennsylvania, (privately held).

<sup>48</sup> Para conocer un resumen de las críticas más relevantes a la decisión sobre la sentencia por la que se anula la ley agraria consultar KELLY & HARBISON, 1948, II, pp. 738-741. Por su parte, MORGAN, 1985, p. 432, refleja las palabras del secretario de Justicia Homer Cummings cuando advierte al subsecretario Reed: «Stanley, tú vas a batir el record. Si te descuidas, vas a ser el único Subsecretario que no ha ganado ningún caso».

<sup>49</sup> Editorial. «Supreme Court Blocks Raw Deal Detour Around the Constitution». *Los Angeles Examiner*. Los Angeles, 10 de enero de 1936.

<sup>50</sup> Roscoe Steffen. «The Supreme Court Ruling». *The New York Times*. New York, 13 de enero de 1936.

<sup>51</sup> R. L. «La situación de Roosevelt, gravemente comprometida ante la opinión norteamericana.- El Tribunal Supremo, al derogar la ley de reorganización agrícola, ha asestado un definitivo golpe a la política del Presidente. La sentencia sienta el principio de que el Congreso no puede acordar reglamentaciones generales.- La ley agraria benefició a los agricultores, pero levantó protestas de los consumidores y fabricantes», *El Debate*. Madrid, 19 de enero de 1936, p. 1, Suplemento Extraordinario.

*Dispatch*, aludía a una analogía con la guerra civil para argumentar contra la interpretación estricta de la Constitución por algunos miembros de la Corte Suprema<sup>52</sup>.

En un estudio del Departamento de Agricultura, basado en las cartas de los lectores publicadas en algunos periódicos sobre la acción del Tribunal Supremo, se constataba que sólo en el noreste de Estados Unidos se registró una mayoría favorable a la decisión, un 64%, mientras que en el resto del país, mucho más sensible a los problemas del sector agrario, se criticó a la Corte: en el suroeste, un 72%; en el noroeste, un 70'96%; en el sureste, un 70'8%, y en el medioeste, un 67'9%. En la costa del Pacífico las opiniones estaban más divididas<sup>53</sup>.

## 6. PRINCIPAL CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA: EL INCREMENTO DEL APOYO POPULAR A ROOSEVELT PROVOCA UN GIRO A SU POLÍTICA

Al producirse la sentencia Butler, Roosevelt y todo el Departamento de Agricultura abordaron la sustitución de la ley agraria con gran celeridad, ya que ésta había paralizado todo el programa agrario, porque una de las principales características del plan, la capacidad para fijar impuestos, había sido anulada. Al mismo tiempo, se aceleró la transición que se venía planeando desde hace tiempo en el Departamento de Agricultura, por la que se pretendía pasar de un programa con carácter provisional a uno con objetivos a largo plazo, en el que la conservación del suelo y la mejora de las prácticas agrarias fueran las metas primordiales de la política agraria<sup>54</sup>.

Así pues, sabiendo que contaba con el apoyo de la opinión pública norteamericana, Roosevelt formó una alianza con el Congreso para neutralizar los efectos de las decisiones del Tribunal Supremo. El legislativo agilizó la aprobación de la nueva medida agraria y el 29 de febrero de 1936 se materializaba la *Soil Conservation & Domestic Allotment Act*. Había varios factores que aceleraron el proceso: por un lado, era un año de elecciones y el medio-oeste estadounidense, tradicionalmente republicano, podía ser el factor decisivo en los resultados electorales, por otro, había que buscar alguna forma de seguir subvencionando a aquellos agricultores que tenían contratos de control de la producción con la administración. Otro factor que incidió

<sup>52</sup> Johathan Daniels. *News and Observer*. Raleigh, North Carolina, 7 de enero de 1936, p. 4. Virginius Dabney. *Times Dispatch*. Richmond, Virginia, 8 de enero de 1936, p. 8: «tan estricto constitucionalmente hablando como falto de interés por el bienestar general como en la decisión Dred Scott».

<sup>53</sup> Carta y Memorandum de Alfred D. Stedman, Director of Information, Agriculture Adjustment Administration, a Henry A. Wallace, Secretary of Agriculture, Henry A. Wallace, 24 de febrero de 1936. Office File. Miscellaneous. 1936-1945, Supreme Court, Folder 1K, Archives, *Franklin Delano Roosevelt Library*, Hyde Park, New York.

<sup>54</sup> El historiador Arthur M. Schlesinger revela que el secretario de Agricultura, Henry A. Wallace, era consciente, en 1935, de que la *Agricultural Adjustment Act*, ya no producía los efectos esperados, debido, principalmente, a que muchos agricultores, especialmente en las zonas trigueras, estaban fuera del sistema de control, e incrementaban su producción anulando el efecto del programa agrario. UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1937, p. 1; BLAISDELL, 1974, p. 49; ALSOP, 1982, p. 147.

sobre la respuesta gubernamental era que se había registrado un fuerte descenso en los precios de los productos agrarios<sup>55</sup>.

Una de las consecuencias más inmediatas de la decisión judicial fue el apoyo incondicional del ciudadano medio americano a Roosevelt. Peter H. Irons asegura que los norteamericanos, al igual que su presidente, consideraban que la sentencia era el equivalente a una declaración de guerra del Tribunal Supremo hacia el *New Deal*, como se constataba en las numerosas muestras de adhesión que recogían las publicaciones norteamericanas coetáneas. Asimismo, en la historiografía posterior se prevé que «los últimos resultados del lenguaje (utilizado) en estas opiniones afectarán profundamente la vida de los americanos en el futuro»<sup>56</sup>.

Unos meses más tarde, este respaldo del pueblo norteamericano se plasmaba en los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre de 1936, donde Franklin Delano Roosevelt alcanzó uno de los mayores triunfos de toda la historia de los Estados Unidos. Este hecho fue anunciado por la prensa liberal española en la que pronosticaba que la sentencia Butler no haría que disminuyera el apoyo popular hacia el presidente Roosevelt<sup>57</sup>.

Como consecuencia de las sucesivas decisiones del Tribunal contrarias a su política, el presidente Roosevelt iría buscando progresivamente el respaldo de los trabajadores. Su política fue evolucionando desde las etapas de ayuda y recuperación a la de reforma, respondiendo así a una de las mayores críticas que se habían registrado en contra de la ley agraria en la que se afirmaba que en ella se había abortado la parte reformista, resultando favorecidos los intereses de los grandes propietarios, y dejando desatendidas las demandas de las clases más necesitadas de la agricultura americana<sup>58</sup>.

Simultáneamente al fortalecimiento de la figura del presidente Roosevelt se produjo un rechazo popular hacia el Tribunal. Sus miembros fueron salpicados por las reacciones que se registraron en contra de la sentencia. Ellos mismos se sorprendieron de la fuerte oposición que se manifestaba en un amplio sector de la opinión pública norteamericana hacia sus acciones. Uno de los actos más violentos contra el tribunal se da en el estado, eminentemente agrícola, de Iowa, donde llegaron a quemar la efigie de los jueces que habían apoyado la sentencia. De esta protesta se hizo eco la prensa liberal extranjera<sup>59</sup>.

Al mismo tiempo, el antagonismo que se registró en una gran parte de la sociedad norteamericana contra las actuaciones del Tribunal Supremo, produjo unos

---

<sup>55</sup> Carta de Henry A. Wallace a Franklin D. Roosevelt, 28 de enero de 1936. President's Secretary File, Departmental File, Agriculture, Wallace, Folder 53, Archives. *Franklin Delano Roosevelt Library*, Hyde Park, New York. FARLEY, 1936, p. 32; MORGAN, 1985, p. 434.

<sup>56</sup> Véase por ejemplo, Franklin D. Roosevelt. «The Courts Disapprove and the People Approve.- President Roosevelt in Comments on State Papers, Tells the Story of the Crisis in Democracy». *Liberty* 15, (March 19, 1938), pp. 6-8, 10, 11 y 13. WISH, 1945, p. 465; IRONS, 1982, p. 197.

<sup>57</sup> «En Norteamérica.- La ley de Reajuste Agrícola de Roosevelt fue declarada inconstitucional por el Supremo». *El Sol*. Madrid, 8 de enero de 1936, p. 8.

<sup>58</sup> SALOUTOS, 1982, p. 98; KIRKENDALL, 1975, p. 93; McELVAINE, 1993, pp. 162 y 168.

<sup>59</sup> «La ley de Reajuste Agrícola.- Los autores de su invalidación han sido ahorcados en efigie». *La Voz*. Madrid, 8 de enero de 1936, p. 10. «En el Colegio Nacional de Iowa se ejecuta a los jueces del Tribunal Supremo». *El Liberal*. Sevilla, 9 de enero de 1936, p. 6.

efectos inmediatos sobre los veredictos del máximo órgano judicial. Así pues, en la próxima actuación de la Corte se observó un cambio de actitud. El 17 de febrero de 1936 en la sentencia *Ashwander v. Tennessee Valley Authority* apoyaron, en una decisión 8-1, la autoridad del organismo federal *Tennessee Valley Authority, TVA*, para vender electricidad, a pesar de que en 1935, un tribunal de Birmingham, en Alabama, había fallado contra el gobierno federal en este mismo caso. Sin embargo, este cambio sólo iba a ser transitorio, ya que posteriormente se volverían a dictar sentencias contra el *New Deal*.

## 7. CONCLUSIONES

Se puede afirmar que en las actuaciones del Tribunal Supremo se evidenciaba un cierto interés en anular las leyes más significativas del *New Deal* impulsado por la administración demócrata. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para algunos de estos jueces de la Corte podía haber suficientes motivos para pensar que peligraba realmente el sistema de «*checks & balances*» que daba al gobierno de Estados Unidos su estabilidad, al establecer un equilibrio entre las tres ramas del poder: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por lo tanto, a su juicio, era necesario detener todas las medidas legislativas reformistas promovidas por el ejecutivo durante el *New Deal*.

En la declaración de inconstitucionalidad de la *Agricultural Adjustment Act*, es evidente que se adjudicaba la responsabilidad de la misma de forma distinta según fuera la ideología del que manifestaba la opinión. En los sectores demócratas se consideraba que el máximo responsable de la misma era el Tribunal Supremo, y al mismo tiempo se incidía en las repercusiones negativas que iba a tener en la agricultura americana, ya que paralizaba todo su programa de reforma así como la financiación del mismo. Sin embargo, en las filas republicanas se liberaba de toda responsabilidad al Tribunal argumentando que se había limitado a cumplir con su obligación y achacaban la invalidación a los defectos que presentaba la propia ley agraria, así como a la existencia de una Constitución obsoleta que no respondía a las necesidades de la sociedad estadounidense. Igualmente, los sectores conservadores destacaban las repercusiones que iba a tener sobre la intención de voto en las elecciones de noviembre de 1936, presagiando una disminución del apoyo hacia Roosevelt, hecho que no se produjo, ya que triunfó por una amplia mayoría.

Como consecuencia de la serie de sentencias del Tribunal Supremo contrarias a la política reformista del presidente Roosevelt y que culminó con la anulación de la *Agricultural Adjustment Act*, parecía evidente que el *New Deal* no podía coexistir con una Corte Suprema en la que la mayoría de sus miembros declaraban anticonstitucionales sus leyes. Este fallo del Tribunal Supremo quedará grabado en la historia de los Estados Unidos como uno de los mayores intentos realizados por dicho Tribunal para limitar la actuación de los poderes legislativo y ejecutivo de la nación. El máximo órgano jurídico, con el legítimo poder que le otorga el ser depositario de una de las ramas del Gobierno, trató de involucrarse en asuntos políticos y eco-

nómicos durante el *New Deal* como raras veces había hecho en la historia de los Estados Unidos.

Sin embargo, se produjo una consecuencia final de la anulación de las leyes del *New Deal* por el poder judicial, y fue la inclinación hacia la izquierda del presidente Roosevelt después de mucho tiempo de vacilaciones y permanencia en una zona central y ambigua, donde se registraba una doble oposición desde la izquierda y desde la derecha. Ello se reflejaba en la prensa liberal española, en la que se utiliza un tono esperanzado ya que evidentemente esa prensa lo quería así:

Y esto va a tener la virtud de desatar las presiones y provocar una contienda en la que tal vez Mr. Roosevelt no se sitúe tan decididamente como hasta la fecha del lado de los patronos y frente a las masas que le han dado los votos. Aún es tiempo para él... Acaso se decida por fin por la revisión de valores que prometió en su discurso inaugural el 4 de marzo de 1933<sup>60</sup>.

## 8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ALSOP, Joseph

1982 *A Centenary Remembrance*. New York. Da Capo Press.

BAUM, Lawrence

1985 *The Supreme Court*. Washington. Congressional Quarterly Press.

BENEDICT, Murray R.

1953 *Farm Policies of the United States, 1790-1950: A Study of their Origins and Development*. New York. The Twentieth Century Fund.

BLAISDELL, Donald

1974 *Government & Agriculture. The Growth of Federal Farm Aid*. New York. Da Capo Press.

BOURNE, Kenneth & WATT, D. Cameron, (general eds.)

1986 *British Documents on Foreign Affairs: Reports & Papers from the Foreign Office Confidential Print. Part II, (From the First to the Second World War). Series C, North America 1919-1939*, editado por David K. ADAMS. Frederick. Maryland. University Publications of America, Inc., 15 vols.

BRAEMAN, John; BREMNER, Robert & BRODY, David (eds.)

1974 *The New Deal*. Columbus, Ohio. Ohio State University Press.

BURNS, James M.

1984 *Roosevelt: The Lion and the Fox*. New York. Harcourt Brace & Co.

CARTER, Boake

1936 *Johnny Q. Public Speaks. The Nation Appraises the New Deal*. New York. Dodge Publishing Company.

DAVIS, Kenneth

1985 *F. D. R. The New Deal Years. 1933-1937*. New York. Random House.

DAWSON, Nelson L.

1980 *Louis D. Brandeis, Felix Frankfurter and the New Deal*. Connecticut. Archon Books.

---

<sup>60</sup> Jaime Menéndez. «El Tribunal Supremo y la NRA.- Un señalado triunfo de Mr. Roosevelt». *El Sol*. Madrid, 4 de junio de 1935, p. 8.

- FARLEY, Miriam S.  
1936 *Agricultural Adjustment Under the New Deal*. New York. American Council.
- GRAHAM, Otis L. & WANDER, Meghan R.  
1982 *Franklin D. Roosevelt: His Life and Times: An Encyclopedic View*. New York. Da Capo Press, Inc.
- HAMILTON, David E.  
1991 *From the New Day to the New Deal. American Farm Policy from Hoover to Roosevelt, 1928-1933*. Chapel Hill & London. University of North Carolina Press.
- HOOVER, Herbert C.  
1953 *The Memoirs of Herbert C. Hoover. Vol. 3. The Great Depression 1929-1941*. London. Hollis & Carter.
- IRONS, Peter H.  
1982 *The New Deal Lawyers*. Princeton. Princeton University Press.
- KELLY, Alfred H. & HARBISON, Winifred  
1948 *The American Constitution. Its Origins and Development*. New York. W. W. Norton & Co.
- KILE, Orville M.  
1948 *The Farm Bureau Through Three Decades*. Baltimore. The Waverly Press.
- KIRKENDALL, Richard S.  
1975 «The New Deal and Agriculture». In BRAEMAN, BREMNER & BRODY, pp. 83-106.
- LEUCHTENBURG, William E.  
1963 *Franklin D. Roosevelt and the New Deal. 1932-1940*. New York. Harper & Row, Publishers.
- LINK, Arthur S. & CATTON, William E.  
1967 *American Epoch. A History of the United States since 1900*. New York. Alfred A. Knopf.
- LORD, Russell  
1939 *The Wallaces of Iowa*. Cambridge. The Riverside Press.
- MAIDMENT, Richard A.  
1991 *The Judicial Response to the New Deal. The United States Supreme Court and Economic Regulation, 1934-1936*. Manchester. Manchester University Press.
- MANEY, Patrick J.  
1992 *The Roosevelt Presence. The Life and Legacy of FDR*. Berkeley. University of California Press.
- MCELVAINE, Robert S.  
1991 *The Great Depression: America, 1929-1941*. New York. Times Books.
- MOLEY, Raymond  
1966 *The First New Deal*. New York. Harcourt, Brace & World, Inc.
- MORGAN, Ted.  
1982 *FDR. A Biography*. New York. Simon & Schuster.
- PETERSON, William H.  
1959 *The Great Farm Problem*. Chicago. Henry Regnery Co.
- RAUCH, Basil  
1944 *The History of the New Deal*. New York. Creative Age Press, Inc.
- SALOTOS, Theodore  
1982 *The American Farmer and the New Deal*. Arres. Iowa State University Press.
- SARGENT, James E.  
1981 *Roosevelt and the Hundred Days. Stuggle for the Early New Deal*. New York. Garland Publishing, Inc.

SCHLESINGER, Arthur M., Jr.

1988 *The Age of Roosevelt. The Coming of the New Deal*. New York. The American Heritage Library.

THE SECRETARY OF STATE (dir.).

1934 *The Statutes at Large of the United States. From March 1933 to June 1934. Vol. XLVIII, Parts 1 & 2*. Washington, D. C. United States Government Printing Office.

THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

1934 *Agricultural Adjustment Act, 1933. Opinion of the Supreme Court of the United States together with the Dissenting Opinion*. Washington, D. C. United States Government Printing Office.

TUXWELL, Rexford G.

1957 *The Democratic Roosevelt. A Bibliography of Franklin D. Roosevelt*. New York. Doubleday & Co., Inc.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1937 *Agricultural Conservation 1936*. Washington, D. C. United States Government Printing Office.

WALLACE, Henry A.

1936 *Whose Constitution? An Inquiry into the General Welfare*. New York. Reynal & Hitchcock.

WISH, Harvey

1945 *Contemporary America. The National Scene since 1900*. New York. Harper & Brothers Publishers.